

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
Rama Judicial del Poder Público  
**JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

| <b>FALLO DE ACCIÓN DE TUTELA</b> |  |    |    |     |             |              |    |
|----------------------------------|--|----|----|-----|-------------|--------------|----|
| FECHA                            | VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021)                         |    |    |     |             |              |    |
| RADICADO                         | 05001  | 31 | 05 | 017 | <b>2021</b> | <b>00336</b> | 00 |
| PROCESO                          | TUTELA N°101 de 2021   |    |    |     |             |              |    |
| ACCIONANTE                       | DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ   |    |    |     |             |              |    |
| ACCIONADA                        | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS |    |    |     |             |              |    |
| PROVIDENCIA                      | SENTENCIA No.270 de 2021   |    |    |     |             |              |    |
| TEMAS                            | PETICION, DIGNIDAD, IGUALDAD, entre otros                                    |    |    |     |             |              |    |
| DECISIÓN                         | NO TUTELA DERECHOS   |    |    |     |             |              |    |

El señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.1.000.756.061, actuando en nombre propio, presentó en este Despacho judicial acción de tutela en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por considerar vulnerados los derechos fundamentales, PETICION, DIGNIDAD, IGUALDAD, entre otros que, en su sentir, le han sido conculcados por dicha entidad.

Pretende el señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, que se tutele los derechos invocados y se ordene a la entidad accionada que le responda de fondo , concreta, sobre la petición del 24 de mayo de 2021, solicitando la entrega de la carta de reconocimiento y pago de la reparación administrativa por desplazamiento. le suministre y entregue la ayuda humanitaria a la que tiene derecho.

Para fundar la anterior pretensión, manifiesta que es desplazado por la violencia que se vive en el país, debidamente registrada en el sistema de población desplazada (ruv). Que radicado derecho de petición ante la UARIV, el 24 de mayo de 2021. A través del correo certificado 472, solicitando la notificación y entrega de la carta de reconocimiento y del pago de la reparación administrativa por desplazamiento forzado, que la entidad no le ha dado respuesta, que la Unidad le realizó el pago a de forma efectiva a dos integrantes del núcleo familiar, de nombre MIGUEL ANTONIO RODRIGUEZ SERRANO y MARIA ALICIA RAMIREZ CASTRO, que entregó la documentación a la UARIV el 15 de octubre de 2020, solicitando la reparación administrativa por desplazamiento forzado a su nombre.

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00

### **PRUEBAS:**

La parte accionante anexa con su escrito:

-La cédula de ciudadanía del accionante, derecho de petición del 03/12/2020, (fls. 8/9).

### **TRÁMITE Y RÉPLICA**

La presente acción se admite en fecha del 22 de julio de este año, ordenándose la notificación al Director General de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, doctor ENRIQUE ARDILA FRANCO, enterándolos que tenían el término de DOS (2) días para pronunciarse al respecto, e igualmente ordenando imprimirle el trámite establecido para esta clase de acciones.

A folios 29/33, reposa la notificación a la entidad accionada, mediante correo electrónico. Notificada la acción de tutela conforme las previsiones de los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, se le concedió un término de DOS (02) días a las accionadas para rendir los informes del caso.

La entidad accionada UARIV, a folios 34/64 da respuesta a la acción de tutela manifestando que:

*“...La Unidad para las víctimas, mediante radicado de salida 202172015700581 de 6 de noviembre de 2021, procedió a dar respuesta al derecho de petición incoada por DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, no obstante, se realiza alcance con radicado de salida 202172021249381 del 23 de julio de 2021 enviado al correo electrónico del accionante.*

*Respecto del caso en particular, frente a la indemnización administrativa. Referente al señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, la Unidad para las víctimas le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución N°.04102019-174499 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1 y siguientes del Decreto único reglamentario 1084 de 2015”, en la que se decidió otorgarle la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO radicado 382449-158922 marco normativo Ley 387 de 1997 y aplicar el método técnico de priorización.*

*Con respecto al caso particular del señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, debido a que no acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, esto es: i) tener más de 68 años de edad, o, ii) tener enfermedad huérfana, de tipo reinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud*

b.b

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00

*y Protección Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de salud y Protección social o la superintendencia Nacional de Salud, se concluye que se debe aplicar el método técnico de priorización...”*

Por lo que precluidos todos los términos, sin otro que agotar, lo procedente es decidir de fondo, lo que se hará con fundamento en las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

El Artículo 86 de la Carta Magna que nos rige, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 y el Reglamentario 306 de 1992, establece como un mecanismo breve y sumario para el amparo de los derechos fundamentales de rango constitucional, la ACCIÓN DE TUTELA.

Mecanismo preferente y prevalente que puede instaurar cualquier persona cuando quiera que tales derechos resulten amenazados o conculcados por cualquier autoridad pública o en determinadas circunstancias por un particular y, el cual por el mismo mandato constitucional y legal, impone a los jueces de la República dar una pronta decisión pues se funda en los principios de sumariedad y celeridad en razón de los derechos que presuntamente están siendo amenazados o conculcados.

Así mismo, se ha determinado y ha sido pronunciamiento de la jurisprudencia constitucional que se trata de un trámite o medio de defensa de carácter residual y subsidiario, o sea cuando no haya otro medio de defensa judicial, pero para que la tutela sea improcedente indispensable es que el otro mecanismo sea idóneo y eficaz, con el objetivo de lograr la finalidad específica de brindar de manera plena e inmediata la protección de los derechos amenazados o violados.

La legitimación para instaurar esta acción la establece el Artículo 10 del Decreto 2591, estableciendo que esta puede hacerla cualquier persona en su propio nombre y en defensa de sus derechos, o por Representante, enseñando que los poderes otorgados para tal fin se presumirán auténticos, también puede hacerlo un tercero cuando quiera que el afectado no pueda asumir la defensa de sus derechos (agencia oficiosa), legitimación que también radica en cabeza del Defensor del Pueblo y en los personeros municipales.

A su vez, expresa el canon 13 de ese Decreto que la acción podrá instaurarse contra la autoridad pública y, excepcionalmente contra el particular, que amenace o desconozca el derecho cuya protección se busca.

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00

En este caso en concreto, quien instaura la acción es a quien presuntamente está desconociendo o amenazando los derechos que presuntamente invoca como violados y, lo hace contra un organismo del sector descentralizado por servicios del orden nacional, de ahí que la legitimación por activa y pasiva está debidamente acreditada por activa y pasiva.

El Artículo 37 del plurimencionado Decreto 2591, ha determinado la competencia para conocer de esta clase de acciones, a prevención, en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde presuntamente se esté vulnerando o amenazando el derecho cuya tutela se pide.

Al respecto, claro es que el accionante actualmente y, a raíz de la particular situación que le obligara a desplazarse a esta ciudad, busca ante el organismo que legalmente corresponde la protección de los derechos fundamentales de las personas que como ella integran la llamada población desplazada en nuestro país, por lo que posible es sostener que sus derechos le están siendo afectados es en esta ciudad.

Ahora bien, en la respuesta que hace la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, manifiesta que:

*“...La Unidad para las víctimas, mediante radicado de salida 202172015700581 de 6 de noviembre de 2021, procedió a dar respuesta al derecho de petición incoada por DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, no obstante, se realiza alcance con radicado de salida 202172021249381 del 23 de julio de 2021 enviado al correo electrónico del accionante.*

*Respecto del caso en particular, frente a la indemnización administrativa. Referente al señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, la Unidad para las víctimas le brindó una respuesta de fondo por medio de la Resolución N°.04102019-174499 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se decide sobre el reconocimiento de la medida de indemnización administrativa a la que hacen referencia los artículos 132 de la ley 1448 de 2011 y 2.2.7.3.1 y siguientes del Decreto único reglamentario 1084 de 2015”, en la que se decidió otorgarle la medida de indemnización administrativa por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO radicado 382449-158922 marco normativo Ley 387 de 1997 y aplicar el método técnico de priorización.*

*Con respecto al caso particular del señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, debido a que no acreditó una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, esto es: i) tener más de 68 años de edad, o, ii) tener enfermedad huérfana, de tipo reinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social, o iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de salud y Protección social o la superintendencia Nacional de Salud, se concluye que se debe aplicar el método técnico de priorización...”*

Por lo hechos narrados y en relación con el derecho de petición elevado por el señor DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, identificado con cédula de

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00

ciudadanía No. 1.000.756.061 esta Juez constitucional considera que la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, resolvió oportunamente y de fondo la petición y por ello la violación que la accionante alega haber sufrido se encuentra configurada como un HECHO SUPERADO.

La Corte Constitucional, refiere la situación del hecho superado, de la siguiente forma:

*“La doctrina constitucional ha sostenido, en concordancia con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1.991, que el objetivo fundamental de la acción de tutela no es otro que la protección efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o de un particular en los casos expresamente señalados en la ley.*

*Así las cosas, la eficacia de la acción de tutela reside en el deber que tiene el juez, si encuentra vulnerado o amenazado el derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.*

*Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la violación o amenaza ya ha sido superada, es decir, la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional – acción de tutela- pierde eficacia y por tanto, su razón de ser. En estas condiciones, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener y el proceso carecería de objeto, resultando improcedente la tutela; efectivamente, desaparece el supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución Política – la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.”- Cfr. Sent. De la Corte Constitucional T-558 de octubre 6 de 1.998, la misma que se ha venido ratificando en casos como el que se decide”.*

Así las cosas, habrá de denegarse el amparo solicitado con respecto al derecho de petición, por carecer la presente acción de objeto, al haber cesado la situación que estaba dando origen a la vulneración del derecho de la accionante.

En consecuencia, no se accederá a dicha solicitud, toda vez que la entidad accionada dio respuesta oportuna a la solicitud formulada por el accionante, lo cual hace prever que no hay derecho fundamental que se encuentre amenazado y mal haría este despacho en proteger a través de una acción como la que nos convoca, derechos fundamentales sin que exista prueba de su violación.

Esta sentencia se notificará a las partes conforme lo establece el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00

Si la presente providencia no fuere impugnada dentro del término de tres (3) días señalados en el Artículo 31 del Decreto 2561 de 1991, por la Secretaría se enviarán las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Por lo expuesto, el **JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**FALLA:**

**PRIMERO.** DENIEGASE la solicitud de tutela formulada por el señor **DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.000.756.061, en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS** por las razones expuestas en la parte motiva.

**SEGUNDO.** NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más ágil y expedito, de no lograrse personalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 306 de 1992, y en armonía con el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

**TERCERO.** Si la presente providencia no es impugnada, remítase a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**GIMENA MARCELA LOPERA RESTREPO**

**JUEZ**

Firmado Por:

**GIMENA MARCELA LOPERA RESTREPO**

**JUEZ CIRCUITO**

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA  
ACCIONANTE: DAVID ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ  
ACCIONADO: U.A.R.I.V.  
RADICADO: 05001-31-05-017-2021-00336 00

**JUZGADO 017 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**f02d301ea88820e4e5f31d3d73f116469170d11a0b5ab94827c0dfb7090aa5cf**

Documento generado en 28/07/2021 12:03:17 PM

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**